

Mercado laboral: evidencias de un problema que exige respuestas urgentes

Por Carolina Atencio

Directora Ejecutiva del Centro de Estudios para la Gobernanza

Miércoles pre-feriado. A la buena noticia del descanso de mitad de semana se le opone otra que no lo es tanto: en el primer trimestre de 2019, el desempleo rompió la barrera del dígito y se ubicó en 10.1%, lo que implica un incremento de 1 punto comparado con igual periodo del año anterior. El dato en cantidad de personas llama la atención: en Argentina, 1.338.000 personas no tienen trabajo y lo están buscando activamente. En el Gran Buenos Aires, la tasa de desocupación es del 11.1% (la región más alta de todo el país) y en el Gran La Plata, son 46.000 personas las que no tienen empleo, lo que equivale al 10.8% de la población económicamente activa y a un incremento de 3 puntos porcentuales, comparado con el primer trimestre de 2018.

Por otro lado, para el total de los 31 conglomerados urbanos, la tasa de empleo se mantuvo prácticamente inalterada, lo que permite inferir que el desempleo obedece no tanto a personas que perdieron su trabajo sino a quienes, sin tenerlo, empezaron a buscarlo, empujadas por factores económicos que exigen incrementar de algún modo los ingresos familiares para sortear los gastos básicos, cada vez mas elevados.

En el Gran La Plata, la tasa de actividad creció de 44.8% a 48.4%, es decir, hubo un incremento de personas que ingresaron al mercado laboral, lo que no necesariamente implica que obtuvieron un empleo; sin embargo también se evidenció una evolución en la tasa de empleo de 3 puntos porcentuales, que invita a poner el foco en qué clase de empleos son los creados y cuál es la calidad de los “nuevos empleos”.

Tanto al nivel nacional como en el plano local, se evidencia un crecimiento del cuentapropismo, es decir, quienes trabajan de manera no asalariada, y del empleo informal. Si se consideran los 31 conglomerados urbanos, de hecho, los empleos asalariados formales (relación de dependencia), decrecieron. En tanto, en la ciudad de La Plata, el mayor crecimiento se evidencia en el empleo informal, que pasó del 34.1% al 35.9%, lo que equivale decir que 136.420 personas se encuentran en la informalidad, con las negativas consecuencias en términos de protección social que ello conlleva.

Si se sigue el análisis en el plano local, se observan otros datos que alarman: el importante aumento de la población subocupada, es decir, aquella que está dispuesta a trabajar una mayor cantidad de horas, que pasó de 10.1% a 18% y el de la población ocupada demandante de empleo, que es aquella que aún empleada, se encuentra en búsqueda activa de otro trabajo: este indicador evidenció un incremento de casi 6 puntos porcentuales. En suma, en la ciudad, un 40% de la población económicamente activa, **169.000 personas**, presentan

problemas de empleo, ya sea por falta de uno o por disconformidad con el que tienen.

Para terminar de configurar el escenario, si se analizan los problemas en el mercado laboral por grupos de edad y por género, se observa que entre los/as jóvenes, el desempleo aumentó exponencialmente: las mujeres jóvenes (menores de 29 años) son las más perjudicadas, con una tasa de desocupación del 25%, lo que equivale decir que 1 de cada 4 se encuentra sin trabajo. Entre los varones, este número es del 19.2%. Ambos indicadores presentan un aumento de más de 5 puntos porcentuales si se compara con el mismo período del año anterior.

Esto último resulta en particular preocupante, porque el deterioro de las condiciones del mercado laboral, en especial, para personas jóvenes tiene consecuencias negativas dinámicas, toda vez que la no inserción redonda en menos experiencia para futuras búsquedas, en un mercado competitivo que exige cada vez mayores estándares de capacitación y antecedentes.

No resulta novedoso vincular estas malas noticias con la situación macroeconómica, que si bien, muchas veces parece ajena a los problemas cotidianos, se encuentra en constante diálogo. El deterioro de la industria y la actividad económica, la devaluación, la fuerte inflación y la caída de los salarios reales, las paritarias insuficientes y otros factores permiten explicar estos datos (y otros como los de pobreza) que exigen un profundo replanteo de las decisiones de política pública que se toman en los altos niveles de gobierno.

Pensar políticas públicas eficaces para revertir la pobreza y el desempleo implica, en primer término, tener un cabal conocimiento del estado de situación. Está claro, en estas y en anteriores series de indicadores de mercado laboral, que el principal problema de desempleo está entre las personas jóvenes y en especial entre las mujeres.

En este sentido, es fundamental pensar soluciones que tengan correlato con la evidencia. Será inútil, por ejemplo, pensar en una política de incentivo al trabajo en sectores masculinizados de la economía (como la construcción) si el problema que quiere atacarse es el desempleo de las mujeres. Por el contrario, si verdaderamente se toma nota del importante desafío que evidencian los datos en el empleo joven, será obligación de quienes ostentan cargos de toma de decisión en estos ámbitos, diseñar programas estatales focalizados que estimulen la mejora de las condiciones de este sector.

Por otro lado y aunque parezca una premisa un tanto obvia, es condición de éxito que las políticas que se diseñen sean coherentes. Esto significa, por ejemplo, que si los indicadores evidencian que las mujeres son las principales empleadas en el sector público y también las principales afectadas por los problemas de empleo, una política de despidos masivos en este sector será contradictoria con el

discurso de fomentar el empoderamiento económico de las mujeres y su inclusión laboral. Esto, aunque resulte una verdad de *Perogrullo* se observa de manera sistemática en la realidad y constituye un serio problema de “expectativa / realidad” que necesita evidenciarse.

Por último, resulta inevitable hacer mención a que todo este análisis se realiza en relación con el trabajo remunerado, lo que deja por fuera a otro tipo de trabajo, invisible, que es aquel que se realiza todos los días al interior de los hogares y que garantiza la reproducción social y el desarrollo productivo: las tareas de cuidado, que recaen mayoritariamente en manos de mujeres y cuya distribución inequitativa tiene un impacto negativo en la inserción femenina en el mercado laboral, como indican los datos analizados más arriba.

Es evidente la situación de clara desventaja en la que se encuentran las mujeres, que enfrentan dobles jornadas laborales (al interior de sus hogares y por fuera) por las que no reciben la remuneración correspondiente y para las que hay poca o nula protección social y servicios públicos. Estas desigualdades impactan en las posibilidades de ocupar puestos de toma de decisión, independientemente de la capacidad y credenciales que las mujeres ostenten.

En este sentido, la discusión acerca del rol del Estado como garante del derecho a cuidar y a ser cuidado se vuelve urgente. Un nuevo contrato social exige ubicar la sostenibilidad de la vida en el centro de la agenda y repensar el modo en que en la actualidad se agencian los cuidados, para promover esquemas de corresponsabilidad más justos y que iguallen el punto de partida entre varones y mujeres.

Esto implica interpelar el modo en que concebimos la economía y el Estado, discutir la división público-privado y el rol que cumplen las instituciones (estatales y no estatales) en garantizar el desarrollo sostenible.

Sin replanteos fundantes y decisiones focalizadas, los indicadores socioeconómicos laborales seguirán arrojando nada más que malas noticias.